

Colombia: un año de Betancur. Imágenes y realidades

Jorge Orlando Melo Historiador colombiano. Miembro del Centro de Estudios de la Realidad Colombiana.

Las elecciones presidenciales de 1982 enfrentaron a dos hábiles y experimentados políticos colombianos, que lograron reunir a su alrededor un apoyo a veces poco coherente. El candidato liberal, Alfonso López Michelsen, pudo ver a su lado las maquinarias clientelistas y a veces corruptas de los grandes caciques liberales, importantes sectores de la burguesía tradicional, junto con nuevos potentados y con intelectuales y dirigentes de izquierda. Mientras para unos garantizaba la continuidad con el régimen liberal de Julio César Turbay Ayala, para otros sus propuestas de paz y amnistía y su esfuerzo por vincular el Partido Liberal a la Internacional Socialista mostraban una voluntad de transformación política y abrían el camino a cambios necesarios en la rígida estructura política del país.

Mientras tanto, Belisario Betancur contaba con el apoyo militante y unánime de un Partido Conservador que no había sido capaz de tener la mayoría en una elección nacional desde 1930, y en forma similar al Partido Liberal contaba con una vigorosa maquinaria clientelista, con un firme respaldo de grupos industriales y financieros y además, con el apoyo más tradicional de un aparato ideológicamente reaccionario y clerical. Sin embargo, el candidato trató de diluir sus lazos públicos con el conservadurismo y en vez de figurar como su candidato prefería presentarse como el personero de un "Movimiento Nacional" al que confluían además los restos de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), dirigidos por la hija del dictador militar Gustavo Rojas Pinilla, y las escasas huestes de la democracia cristiana. Aunque su retórica era imprecisa, retomaba el lenguaje y las promesas de una tradición populista con indudable peso en los sectores urbanos, y se aprovechaba de su independencia frente al gobierno para presentar su movimiento como ajeno al clientelismo y la corrupción reinantes.

A estos candidatos se añadía una disidencia liberal, encabezada por el senador Luis Carlos Galán, que enarbolaba banderas de moralización administrativa y de modernización formal del sistema político, que encontraron eco, ante todo, en grupos de clase media alta irritados por el plebeyismo, la corrupción y la ostentación de grupos sociales de reciente y equívoco origen, y que lograba también un apoyo amplio entre grupos de profesionales y tecnócratas modernizantes. Por último, la izquierda postuló al respetado senador Gerardo Molina, un socialista democrático apoyado en esta ocasión fundamentalmente por el Partido Comunista.

Las paradojas de la política

Los resultados electorales dieron la victoria a Betancur mientras que el candidato liberal perdía una parte menor pero decisiva de su electorado ante el disidente Galán, y la izquierda apenas superaba el 1% de la votación. Betancur se benefició de la adhesión amplia de un electorado urbano relativamente independiente de los aparatos políticos, y obtuvo la ventaja decisiva en las grandes ciudades, donde a los votos del clientelismo conservador, mas silencioso pero no menos eficiente que su contraparte liberal, se sumaron sectores populares atraídos por promesas como la de vivienda sin cuota inicial y universidad a distancia, y sectores medios que votaban en contra de un candidato liberal que no podía romper sus vínculos con un gobierno rechazado por buena parte de la opinión.

La izquierda había encontrado su espacio muy restringido: los temas de paz y amnistía habían sido promovidos en distinto grado por todos los candidatos, con la excepción del mismo Betancur, así como las exigencias de levantamiento del estado de sitio, garantías a la oposición, elección de alcaldes y gobernadores, etc. En ausencia de una propuesta económica y social clara, la identidad de los temas políticos redujo el apoyo a Molina a los sectores vinculados al PC, mientras que buena parte del electorado que tradicionalmente votada por las coaliciones de izquierda se orientó a los otros tres candidatos.

Posesionado de presidente, Betancur reveló una inesperada flexibilidad táctica e ideológica, y una sorprendente capacidad para lograr el respaldo de la opinión pública y generar una imagen positiva de sus intenciones y sus actos. Las encuestas de opinión muestran reiteradamente que, independientemente de los avatares y tropiezos de la gestión real del gobierno, la gran mayoría de los colombianos creen en la buena fe, la bondad, la honestidad, la dedicación, etc., de su presidente. Sin duda, los actos iniciales del gobierno señalaban una clara ruptura con las orientaciones y con el estilo político del gobierno anterior. Se confirma el levantamiento del estado de sitio, hecho pocos días antes del fin de su gobierno por Turbay; se dio apoyo, en el Congreso, entre los diferentes proyectos de ley de amnistía, al más generoso y amplio de todos, presentado por el senador Molina; se anunció la vinculación de Colombia al Movimiento de los No Alineados; se amplió la denuncia y persecución de algunos grupos financieros que habían manipulado el ahorro privado; se denunciaron, por parte del procurador general, a miembros del ejército presuntamente vinculados a grupos paramilitares de extrema derecha. Posteriormente, el gobierno mantuvo su iniciativa en los esfuerzos de paz centroamericana, y dio un fuerte respaldo a los proyectos de ampliación del sistema democrático, como los que tienen que ver con la elección de alcaldes o el estatuto de los partidos políticos.

Estas acciones cuidadosamente dosificadas para no irritar excesivamente a los núcleos centrales de los grupos afectados, han concentrado un inmenso capital político en el presidente, beneficiado además por una permanente comparación implícita del gobierno anterior.

Mientras conserva el respaldo del Partido Conservador, ha logrado ganar una amplia simpatía entre los sectores independientes e incluso dentro del Partido Liberal. La relación plebiscitaria y carismática con la población del país, por otro lado, ha dificultado la acción de los grupos de oposición y del Partido Liberal, que, en desarrollo de normas constitucionales, que exigen al presidente dar participación "equitativa y adecuada" al partido mayor distinto al del ejecutivo, ha recibido la mitad de los cargos del gabinete y de las alcaldías y gobernaciones.

Así, el liberalismo se debate entre la oposición y la solidaridad con los proyectos del gobierno, entre la desconfianza hacia la sinceridad presidencial y la dificultad para rechazar propuestas que coinciden con las del propio liberalismo. Para amplios grupos conservadores, el presidente ha avanzado demasiado en sus concesiones y acercamientos a sectores radicales de opinión, y la propia sinceridad de su vinculación al conservadurismo es puesta ocasionalmente en duda. La izquierda, esperanzada en una paz que reduzca la presencia militar en la vida política del país, ve con simpatía ambigua los complicados movimientos presidenciales, sin lograr definir una actitud de oposición o respaldo.

Un proyecto de paz debilitado

La paradójica y confusa situación que se presenta en las líneas anteriores puede resultar más clara si se subraya un curioso elemento de la situación: la política presidencial se ha basado en dar una gran prioridad a la solución del llamado problema de la paz y la opinión pública ha mantenido su atención centrada en este tema. Es cierto que otros asuntos se debaten, ante una crítica situación económica, en la que se ha visto un rápido aumento del desempleo la caída acelerada de las reservas internacionales y la generación de un déficit fiscal sin precedentes. Pero parecería que el país está dispuesto a esperar sin mucha discusión los resultados de una estrategia económica que promete una "reactivación" para 1984 mediante la aplicación de una política que combina elementos conservadores y monetaristas con dosis moderadas de proteccionismo industrial y estímulo a la demanda, siempre y cuando se mantengan vivas las perspectivas de que podrá lograrse la pacificación del país: Y esto quiere decir el éxito de un proceso de negociaciones con los grupos revolucionarios armados (FARC-M-19, etc.) y el control a la violencia de las organizaciones paramilitares (MAS, Muerte a Secuestradores), que la opinión pública identifica con sectores militares apoyados por hacendados y narcotraficantes.

Para algunos observadores, el inesperado acento democrático e incluso radical de los primeros actos del presidente estaba orientado a convertir el "Movimiento Nacional" en una fuerza política capaz de rodear los límites que imponía su socio mayor, el conservadurismo, sobre la base de una aglutinación de sectores progresistas de ambos partidos. Si esto era así, el mantenimiento de un nivel de violencia político bastante alto y el estancamiento de los procesos de pacificación ligados a la ley de amnistía y a las negociaciones con los grupos guerrilleros han debilitado mucho esta posibilidad, y el presidente parece haber visto en la necesi-

dad de consolidar su apoyo en los aparatos políticos. Con un proyecto de paz debilitado y una intratable situación económica, la política del gobierno no parece destinada a mantenerse dentro de moldes más clásicos, aún si conserva indudables elementos modernizadores. Probablemente, se seguirán combatiendo las formas más abiertas de inmoralidad pública, sin intentar destruir los aparatos políticos de origen burocrático; se controlarán las actividades más aberrantes de represión militar, sin que pueda eliminarse el condicionamiento militar al régimen; se impondrán reglas de juego a los grandes grupos económicos, sin poner en cuestión su dominio de la política económica del país. Unos cuantos logros en este sentido, y una política social con un mínimo de elementos populistas, pueden dar al gobierno suficiente campo de acción para mantener un adecuado apoyo político y controlar las posibilidades de movilizaciones amplias de oposición.

El Gobierno mantiene la iniciativa

En efecto, es poco probable que el Partido Liberal pueda intentar una amplia acción de oposición, dados sus compromisos con el régimen y su debilidad organizativa. Por otro lado, el presidente goza de una credibilidad entre los sindicatos que tomará tiempo desgastar, y seguramente no podrán éstos ir más allá de escaramuzas ocasionales alrededor de puntos concretos de reclamación obrera. La izquierda legal ha perdido buena parte de sus banderas tradicionales, ante un gobierno que se resiste a aparecer como represivo. Y la izquierda armada ha perdido buena parte de la dinámica que la había sostenido: si las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ideológicamente afines al Partido Comunista prosoviético, conservan al menos su vigor tradicional en los sectores rurales, el M-19, que había logrado mantener una imagen de audacia y omnipresencia que no dejaban de ganarle al menos una simpatía tolerante de amplios sectores populares, perdió credibilidad al rechazar y no acogerse a una amnistía por la que había abogado incansablemente, y sufrió un golpe inesperado con la muerte accidental de su figura máxima, Jaime Bateman, en días recientes.

En resumen, el país se encuentra ante un gobierno con una iniciativa política que en el corto plazo nadie puede disputarle, pero cuyos condicionantes hacen poco probable que ofrezca una salida de mediano plazo. En la misma medida en que logre imponer algunas medidas de modernización política, se debilite el clientelismo y ceda la represión militar, los intereses populares insatisfechos pueden buscar más libremente un cauce de expresión.

Los sectores democráticos del país, interesados en generar las condiciones para una verdadera alternativa política popular, enfrentarán entonces el más profundo desafío a su capacidad y a su imaginación.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad N° 68 Septiembre- Octubre 1983, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.